



Poder Judicial de la Nación

FC

**CÉDULA DE  
NOTIFICACIÓN**

**20000040059726**



TRIBUNAL: JUZGADO FEDERAL EN LO CRIM. Y CORR. DE MORON  
2, SITO EN CRISOLOGO LARRALDE 673 PISOS 2 Y 3

FECHA DE RECEPCIÓN EN NOTIFICACIONES:

Sr.: NICOLAS ALFREDO GUTIERREZ LANOEL  
Domicilio: 20256062861  
Tipo de Domicilio: Electrónico  
Carácter: Sin Asignación  
Observaciones Especiales: Sin Asignación

	52000201/2013				AMB. CIV.	N	N	N
Nº ORDEN	EXPTE. Nº	ZONA	FUERO	JUZGADO	SECRET.	COPIAS	PERSONAL	OBSERV.

Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos:

INFORMACION PUBLICA c/ ., . s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-  
VARIOS

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Moron, de diciembre de 2020.



Poder Judicial de la Nación

Fdo.: JUAN CARLOS RUA, SECRETARIO DE JUZGADO

En .....de.....de 2020, siendo horas .....

Me constituí en el domicilio sito en.....

.....

Y requerí la presencia de.....

y no encontrándose .....

fui atendido por: .....

.....

D.N.I; L.E; L.C; N°.....

Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien manifiesta ser:

.....

.....

Acto seguido , e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de .....

procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente

FIRMADO ANTE MI PARA CONSTANCIA.-

Morón, 14 de diciembre de 2020.

**AUTOS Y VISTOS:** este expediente N 52000201/2013 "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/ Ejecución de sentencia. Información pública", del registro de la secretaría nro. 5 del Juzgado Federal nro.2 de Morón.

**Y CONSIDERANDO:**

I. Que con fecha 8 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia definitiva en el marco de la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/ Ejecución de sentencia" (Originario: Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios; daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo)<sup>1</sup>.

Allí estableció tres objetivos simultáneos consistentes en: 1) *La mejora de calidad de vida de los habitantes de la cuenca*; 2) *La recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos)*; 3) *La prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción*, cuyo cumplimiento escindió por mandas y delegó la ejecución del fallo en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes.

Cumplida la primera etapa, mediante la resolución de fecha 19 de Diciembre de 2012 la C.S.J.N. resolvió atribuir a este juzgado la competencia para continuar interviniendo en todas las cuestiones concernientes a la ejecución de la mencionada sentencia, por lo que recae en este tribunal la delicada función de impulsar y controlar la ejecución del fallo.

II. Que en lo que hace al objeto de la presente, la Corte Suprema dispuso que *"para medir el nivel de cumplimiento de esos objetivos la Autoridad de Cuenca deberá adoptar alguno de los sistemas internacionales de medición que se encuentran disponibles..."* que finalmente fueron plasmados en el sistema de indicadores, herramienta imprescindible, cuyo desarrollo debe ser sujeto a una permanente evaluación y perfeccionamiento.

En este marco, desde el juzgado se realizó un control permanente de la tarea, asegurando la intervención del Defensor del Pueblo y las organizaciones de la sociedad civil que conforman el Cuerpo Colegiado y dictando sucesivas

---

<sup>1</sup> Fallos 331:1622.



resoluciones que permitieron una progresiva mejora en cuanto a la selección, justificación y presentación pública del sistema de indicadores.

Pero llegados a este momento, y sin perjuicio del enorme esfuerzo mostrado por las autoridades públicas, lo cierto es que el sistema de medición requiere de una nueva revisión que finalmente lo sitúe como una herramienta verdaderamente idónea para cumplir con sus fines.

Así, recuérdese que el sistema de indicadores tiene una doble función. Por un lado, es un insumo necesario para garantizar el adecuado ejercicio del derecho a información y participación ciudadana, imprescindibles para todo modelo democrático basado en la deliberación pública.

En este sentido, *"el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad"*<sup>2</sup>.

Pero a su vez, resulta fundamental para evaluar de forma certera el avance en la ejecución de las mandas del Máximo Tribunal. Sobre todo en un fallo de naturaleza compleja como el que nos ocupa, el sistema de medición debe permitir a los operadores judiciales encargados del control de la ejecución, representantes de los ministerios públicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil e incluso del público en general, comprender con claridad el punto de partida fáctico existente al momento de iniciar el proceso de ejecución y los estándares que se aspira a lograr para dar por cumplida la condena, junto con el grado de avance logrado hasta el momento.

<sup>2</sup> CortelDH, "Claude Reyes y otros vs. Chile", fallo del 19 de septiembre de 2006, considerandos 86 y 87.



Es en este punto que se advierten las principales deficiencias, que exigen el inicio de un nuevo proceso de reformulación del sistema de indicadores, ya que éstos no resultan aún, y sin perjuicio de los avances oportunamente logrados, una guía adecuada para evaluar el grado de cumplimiento del fallo de la Corte Suprema.

En este sentido, recuérdese que desde el comienzo la Auditoría General de la Nación ha sostenido que *"debieran exponerse tanto los valores de las variables o de los indicadores que implican el logro de la `meta` prevista así como el que corresponde al cumplimiento del objetivo. Este último, entendido como aquél que significa haber alcanzado el saneamiento de la Cuenca en el asunto involucrado"*<sup>3</sup>.

Esto fue ratificado en el año 2016, mediante el informe 197/2016 que dice que el *"Sistema de Indicadores publicado por la ACUMAR cumple parcialmente con lo mandado por la C.S.J.N., en términos de (...) "medir el avance en el cumplimiento de los objetivos" (...) que se expone en el fallo de la C.S.J.N. de julio de 2008"*<sup>4</sup>.

En el mismo sentido, del informe realizado por los equipos técnicos del CONICET agregado por el MPF, surge que *"... los equipos que han analizado el sistema de indicadores propuesto por ACUMAR, han detectado inconsistencias en el sistema de indicadores propuesto en un doble nivel: 1) Por un lado, en la relación entre mandas e indicadores. El diseño y las justificaciones teórico-metodológicas del sistema se concentran en mostrar la complejidad de la CMR y ubican como unidad de análisis el desarrollo sostenible de la CMR, pero no abordan cabalmente como este sistema es adecuado para producir información sobre el cumplimiento de un mandato judicial... (e)n este sentido, en los 11 años desde la sentencia de la CSJN, ACUMAR ha producido un enorme volumen de material vinculado a justificar la complejidad de la medición del desarrollo sostenible en la CMR, a partir de la caracterización de la cuenca como un sistema complejo, y sus repercusiones en la elaboración de un sistema de medición. De la evaluación aquí realizada, consideramos que un problema inicial tuvo que ver con no aplicar una lógica jurídica al sistema de medición a implementar. Esto tuvo como consecuencia más visible que el sistema no operacionaliza las mandas judiciales, sino que las*

<sup>3</sup> Auditoría General de la Nación. *Estudio especial, sistema de indicadores al 31 de octubre de 2012, ACUMAR*, punto 4.1.3.

<sup>4</sup> Auditoría General de la Nación, *Estudio especial, sistema de indicadores, informe anual 2014, ACUMAR* punto V, página 65.



*integra a la lógica de sistemas y subsistemas, diluyendo las acciones concretas desde la política pública para poder dar cuenta del cumplimiento de cada uno de los puntos establecidos por la Corte. En consecuencia, la recomendación central es precisamente dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal y por ello es central una redefinición del sistema de indicadores, el que debe incorporar de manera transversal un enfoque de derechos humanos*"<sup>5</sup>.

Esto muestra que, más allá de los innegables problemas individuales en la construcción de algunas variables o sus procesos de actualización o divulgación, existe un problema de base que debe ser resuelto sin dilaciones y evitando nuevos remiendos o respuestas puramente cosméticas que simplemente pospongan la tarea de fondo a realizar.

### III.

Ahora bien, como he dicho en repetidas oportunidades, el diseño de un sistema de este tipo es una tarea compleja, que no puede ser abordada a la ligera, ni verse modificada con decisiones apresuradas, sino que exige cambios paulatinos y planificados, sostenibles en el tiempo y que no destruyan el valiosísimo trabajo realizado en materia de obtención y sistematización de datos disponibles.

Por ello, frente a esta clase de asuntos el Poder Judicial debe actuar con cautela y tomar todas las medidas necesarias para resguardar las prerrogativas constitucionales de los poderes políticos, puesto que sólo ellos gozan de legitimidad democrática directa<sup>6</sup>. Como ha señalado el Alto Tribunal, "*la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que es el judicial el llamado por ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que un avance de este poder en desmedro de las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público*"<sup>7</sup>.

Pero este resguardo de las prerrogativas de la administración no puede permitir más intentos fallidos. Por ello es que dispondré que en esta oportunidad

<sup>5</sup> Red de Estudios Ambientales Bonaerenses, Grupo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas, Red de Investigadores en Derechos Humanos, Convenio de Asistencia Técnica RIOSPP-CONICET y Ministerio Público Fiscal, *Informe sobre el sistema de indicadores de ACUMAR*, Buenos Aires, agosto de 2019, punto VI, página 83.

<sup>6</sup> Puede verse, en este sentido, NINO, Carlos Santiago, *Fundamentos de Derecho Constitucional*, Ed. Astrea, 2005, p. 682 y ss.

<sup>7</sup> Fallos: 155:248; 311:2580.



la reformulación del sistema de indicadores sea realizada mediante el procedimiento participativo de creación de normas previsto por el decreto 1172/2003 que, al democratizar el proceso, maximice sus potencialidades epistémicas. En dicho marco es que requeriré a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo que, más allá de la convocatoria ordinaria mediante la publicación de edictos y en su página web, haga un adecuado uso de las facultades que le otorga el artículo 18 del Reglamento, a efectos de garantizar una adecuada participación de los potencialmente afectados y los organismos que los representan, para convocar a expertos en el tema y, eventualmente, requerir la producción de informes técnicos específicos.

La central importancia de las decisiones a tomar mediante este proceso participativo me llevan al convencimiento de que al finalizar la etapa reglada y en forma previa a la toma final de decisiones, se deberá celebrar una de las audiencias públicas anuales requeridas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a efectos de presentar los avances intermedios del proceso y, una vez más, asegurar la existencia de las suficientes instancias de participación comunitaria que brinden la necesaria legitimidad democrática al proceso<sup>8</sup>.

Recuérdese que la democracia, entendida como una práctica comunitaria de discusión de los asuntos públicos en la que necesariamente deben verse representadas las voces de todos los potencialmente afectados por la decisión a tomarse, no sólo muestra virtudes sustantivas por su mayor protección de la autonomía e igualdad, sino que mejora la calidad de las decisiones finalmente adoptadas.

En esta línea, José Luis MARTÍ explica que "*(l)a democracia deliberativa está justificada, y por lo tanto las decisiones políticas tomadas mediante un procedimiento democrático deliberativo son legítimas, porque dicho procedimiento posee mayor valor epistémico que otros procedimientos democráticos alternativos. Esto significa que las decisiones tomadas mediante tales procedimientos tienen una probabilidad mayor de ser correctas en general que las tomadas mediante otros procedimientos democráticos siendo dicha corrección al menos parcialmente independiente del proceso e intersubjetivamente válida*"<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Ver Carlos Santiago Nino, *La constitución de la democracia deliberativa* (Barcelona: Gedisa, 2003), 166.

<sup>9</sup> José Luis Martí, *La república deliberativa. Una teoría de la democracia* (Madrid: Marcial Pons, 2006), 181.



Finalmente, si bien como he dicho a lo largo de esta resolución, no es función de esta judicatura definir la forma específica que asumirá esta reforma del Sistema de Indicadores, puesto que *"...el obligado al cumplimiento deberá perseguir los resultados y cumplir los mandatos descriptos en los objetivos que se enuncian en la presente, quedando dentro de sus facultades la determinación de los procedimientos para llevarlos a cabo"*<sup>10</sup>, lo cierto es que deben fijarse ciertos estándares mínimos que aseguren la razonabilidad del resultado.

El primero es, como ya dijimos, el aseguramiento de la participación ciudadana en el proceso de reforma, que además de mejorar sustantivamente la toma de decisiones, brindará una enorme legitimidad democrática a la decisión que finalmente se tome. Y en cuanto al fondo, deberá garantizarse que el nuevo sistema incluya estándares intermedios en cada una de las variables o sus combinaciones específicas mediante las que se considere que se ha dado cumplimiento con algún punto específico del fallo y, finalmente, cual sería el estado de cosas final mediante el que, según el organismo, podrían verse finalmente cumplidos los estándares de satisfacción de derechos exigidos por el fallo cuya ejecución nos ocupa.

Por ello, en esta instancia requeriré a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo que junto con el próximo informe periódico a presentarse en la materia acompañe detalles sobre la forma en que se realizará el proceso con una adecuada fijación de plazos e hitos intermedios y, a su vez, explice el detalle de las personas, entes u organizaciones de la sociedad civil que serán convocadas, como así también de los informes técnicos específicos que serán requeridos.

Por todo ello;

**RESUELVO:**

- I. **Ordenar** a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que inicie un proceso participativo de normas en los términos del decreto 1172/2003 a efectos de realizar una modificación integral del sistema de indicadores, de acuerdo con los estándares aquí previstos.
- II. **Hacer saber** a la ACUMAR que junto con el próximo informe periódico a presentarse en la materia deberá acompañar detalles

<sup>10</sup> Fallos 331:1622, considerando 15.





# *Poder Judicial de la Nación*

*C.S.J.N., M.1569 XL, "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional s/ejecución de sentencia"*

JUZGADO FEDERAL EN LO CRIM. Y CORR. DE MORON 2  
FSM 52000201/2013

sobre la forma en que se realizará el proceso con una adecuada fijación de plazos e hitos intermedios y, a su vez, deberá acompañar el detalle de las personas, entes u organizaciones de la sociedad civil que serán convocadas, como así también de los informes técnicos específicos que serán requeridos.

**III. Regístrese, comuníquese** al Centro de Información Judicial y **notifíquese** a las partes por Secretaría.







República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Resolución JUZGADO FEDERAL EN LO CRIM. Y CORR. DE MORON - 14/12/2020

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.